PRIMERA PROPUESTA:
EL SISTEMA NACIONAL CONTRA LA MACROCORRUPCIÓN

Queridas compañeras y queridos compañeros:

Desde la ciudad de Cali, donde la juventud nos recordó en el estallido social que **la rebeldía puede ser esperanza y cambio**, vengo a compartir el segundo mensaje de **nuestra precandidatura presidencial**. Quiero compartir con ustedes y con toda Colombia mi visión y mi propuesta para enfrentar la corrupción un problema estructural que agobia a la sociedad colombiana.

Vengo a hablar de un mal que, con hipocrecía, han intentado minimizar pese al daño devastador que le ha causado a Colombia. No hablo solo de corrupción, **hablo de la gran corrupción**, de **esa criminalidad extendida que coloniza instituciones, desangra presupuestos, destruye la confianza de la ciudadanía y nos arrebata el futuro**. No es un caso aislado ni una manzana podrida, **es un sistema que hay que desmantelar con decisión y con coraje.** Durante décadas**, como oposición, enfrentamos sin concesiones ni temores a poderes tenebrosos**. Lo hicimos **en las calles, en los debates de control político, en la investigación rigurosa y en la denuncia documentada**. Ese ha sido **nuestro compromiso: poner la verdad por delante y defender lo público**.

Por eso nos **duele y nos avergüenza que, en nuestro propio gobierno, hayan ocurrido hechos como los que involucran al señor Olmedo López**. Según las investigaciones, se habría montado una red para **saquear recursos destinados a socorrer a comunidades golpeadas por desastres naturales**. Quien toca esos recursos **le roba a los más vulnerables**, le arrebata alivio al que lo perdió todo. No hay eufemismos posibles, **es un proceder abiertamente criminal.**

No llegamos al Estado para repetir lo que combatimos, sino para erradicarlo. Por eso en un segundo gobierno **para consolidar el cambio social, vamos a fortalecer la justicia**, mejorar el sistema de alertas tempranas para prevenir los actos de corrupción y optimizar la devolución de lo saqueado, con el fin de recuperar recursos y destinarlos a los programas sociales**, nos emplearemos a fondo para que nada ni nadie vuelva a profanarlos.**

A la sociedad colombiana, hoy no le basta un perdón; le debemos un compromiso inequívoco, una lucha sin cuartel contra la corrupción, venga

de donde venga, caiga quien caiga, sin privilegios ni impunidad, con transparencia total y resultados verificables.
Por eso, como dije, hoy vengo aquí a presentar una propuesta concreta, viable e imperativa para enfrentar juntos este mal.
¿En qué consiste mi propuesta?

Sé que este tema reaparece una y otra vez en cada campaña electoral, en forma de discursos demagógicos y oportunistas que se aprovechan de la indignación colectiva para obtener votos.

En mi caso, por el contrario**, lo que busco es, en primer lugar, definir con precisión el problema, comprender su naturaleza y su verdadera dimensión, y aplicar, en consecuencia, la investigación rigurosa, la justicia efectiva que exige**. Esto **requiere acción institucional en alianza con la participación ciudadana y de los movimientos sociales, investigaciones a fondo, sanciones ejemplares y recuperación de lo robado**.

En el último medio siglo, en Colombia hemos pasado de la corrupción a la gran corrupción. Lo primero es definir con claridad de qué estamos hablando. El término "corrupción" ya no basta para describir lo ocurrido en el Estado y en la sociedad durante las últimas décadas.

De actos individuales, episódicos y relativamente simples —que involucraban a unos cuantos agentes del Estado y a algunos particulares en delitos como el soborno—, **hemos pasado a la macrocorrupción: la descomposición generalizada de instituciones y poderes públicos, y operaciones complejas de estructuras que despliegan actividades concertadas en las que participan un gran número de personas.**

En esos conciertos para delinquir actúan múltiples actores de distinta naturaleza: legales (empresarios, políticos); aparentemente legales, pero aliados con la ilegalidad, ilegales (mafias, grupos armados).

En años recientes hemos visto operaciones de gran escala para capturar e, incluso, reconfigurar el Estado. Por ejemplo, la parapolítica impulsada por el uribismo fue la más significativa de esas expresiones, y llegó a incluir la toma de una porción significativa del Congreso de la República.

Para tener una idea de lo que estamos hablando, basta enunciar algunas cadenas delictivas que hacen parte de la interminable lista de la megacorrupción en el país.

Hoy, cada año, se saquean billones de pesos del erario; institutos y dependencias estatales se convierten en cuotas clientelares y burocráticas de mafias políticas; **la contratación pública se asigna mediante gigantescos sobornos y licitaciones amañadas**; **la adquisición de suministros en dependencias estatales se ha convertido en fuente de lucro para algunos funcionarios**; muchos trámites de la administración pública exigen el pago de "comisiones"; los congresistas se han convertido en tramitadores de prevendas y contratos; **en las elecciones se presentan fraudes periódicos que distorsionan los resultados definitivos**; **los puertos y aduanas son fortines politiqueros para negociar el contrabando con grupos armados y mafias**. Y un largo, muy largo, etcétera.

Ese entramado delictivo alcanza incluso los gastos esenciales para la vida de los colombianos: los recursos de la salud, los fondos para la paz, el dinero destinado a la reparación de las víctimas y los recursos para atender a comunidades afectadas por desastres naturales, que los "Olmedos" de turno no vacilan en saquear.

Se trata de verdaderos aparatos que operan en red para acumular capital, **afectan todas las ramas del poder público y reconfiguran la administración en todos los niveles del Estado**. Ninguna instancia está a salvo, e **incluso dependencias del poder judicial y los órganos de control han sido puestos al servicio de las redes criminales.**

Por esta, entre otras razones, la impunidad de la corrupción se mantiene incólume prolongándose en el tiempo. En 2024, alcanzó una tasa del 94%. De 32 departamentos, 20 tienen un porcentaje de impunidad superior al 95 % y 12 están entre el 90 % y el 94,9 %. A su turno, Bogotá tiene un 88% de impunidad. Así, **la macrocorrupción inflinge un daño estructural al país**: **deslegitima y erosiona la democracia; quiebra las reglas de la competencia económica** al favorecer a unos pocos actores poderosos; **corroe la ética pública**; **alimenta la violencia para encubrirse o mantenerse**, y **reduce la política aun mercado de intereses y ambiciones donde todo vale, incluso perpetrar los peores crímenes.** Esa lógica, desprovista de respeto por las leyes, se ha normalizado como modo de ser y de ascenso en la sociedad.

A esta tragedia nacional debemos decir ¡ya basta! El próximo gobierno progresista, **nuestro gobierno, debe liderar el comienzo de un viraje histórico anticorrupción**.

***
Si esa es la dura realidad que afrontamos ¿en dónde reside el problema del enfoque tradicional que se está aplicando y que posibilita la impunidad?

De acuerdo a lo que han advertido investigadores como Luis Jorge Garay, nuestras políticas anticorrupción han fallado no por falta de normas, sino por problemas de enfoque.

Hemos mirado la corrupción con lentes estrechos y microscópicos.
Necesitamos una mirada estructural y sistémica a la medida de las dimensiones de este flagelo; **que convierta la lucha anticorrupción en una causa nacional**, y esta causa en una verdadera política de Estado, con **nueva arquitectura institucional, jurisdiccional y de reparación social.**

En Colombia la corrupción suele analizarse con una lógica penal reductiva y equivocada. **La corrupción no es la suma de delitos individuales; es una macrocriminalidad que captura instituciones, distorsiona mercados y despoja comunidades**. **Así como un genocidio no puede reducirse a una suma de homicidios, la gran corrupción no puede abordarse con el tratamiento penal del caso individual, o la sumatoria de casos individuales**. **Se trata al corrupto como un delincuente común al que se le impone una pena de cárcel proporcional al dinero usurpado, pero se ignoran los daños reales que el aparato criminal al que pertenece ese delincuente causa sobre las víctimas. Es usual que algunos salgan de prisión con más riqueza y más poder. Eso debe terminar.**

El sistema judicial no está para hacer más poderosos a los delincuentes corruptos, sino para proteger y resarcir a los millones de compatriotas víctimas de este flagelo. **La corrupción tiene víctimas directas, comunidades rurales y urbanas, niñas y niños sin escuela, pacientes sin medicina, familias sin agua, jóvenes sin oportunidades, territorios sin vías de comunicación**.

Por lo tanto, el sistema judicial tradicional, centrado en castigos penales a personas, se queda corto. **Si no hay ataque frontal a la estructura criminal,**

desmantelamiento de sus subestructuras y redes, extinción efectiva de dominio, reparación a las víctimas y recuperación de lo robado, la impunidad se recicla.

Requerimos un modelo integral que ataque la renta, el silencio y el territorio de la corrupción, **fiscalización rigurosa y transparente del gasto público**; decomiso ágil de bienes ilícitos en el país y fuera de este; y una justicia que escuche a las comunidades, repare el daño y priorice inversión donde más se ha perdido. **Esa es la decisión histórica que nos convoca hoy.**

Colombia ya cuenta con desarrollos jurisprudenciales y técnicos para aplicar esta perspectiva sin depender de organismos internacionales. Lo que ha faltado es voluntad política. Hoy debemos ponerla en práctica.
Propongo la creación del Sistema Nacional contra la Macrocorrupción, **una arquitectura institucional coherente** que actúe de principio a fin. Un **sistema con cinco pilares que se refuerzan mutuamente**: **prevención e información, investigación especializada, juzgamiento eficaz con reparación, presencia decidida en los territorios y movilización ciudadana**.

1. Transparencia, prevención e información

- **Pasaremos de reaccionar a anticiparnos**. **La transparencia y la información en tiempo real serán nuestra primera línea de defensa**. Fortaleceremos la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) y **daremos autonomía real —técnica, administrativa y presupuestal— a la Secretaría de Transparencia de la Presidencia, garantizando su independencia y su capacidad de investigación con enfoque sistémico**.
- **Pondremos a funcionar plenamente el Portal Anticorrupción de Colombia (PACO) como plataforma abierta y preventiva**. Construiremos un sistema de alertas tempranas contra la macrocorrupción, articulando bases de datos, trazabilidad del gasto y señales de riesgo.

2. Investigación y juzgamiento con enfoque de sistema

- **Crearemos en la Fiscalía General de la Nación la Unidad Nacional de Investigación de la Macrocorrupción**. **Las cadenas de corrupción no se investigan caso por caso: se investigan como sistemas**, con procesos ágiles y coordinados.
- **Esta unidad identificará los aparatos y estructuras de la macrocorrupción y a sus jefes o determinadores; develará los modus**

operandi, los planes y patrones de criminalidad a escala nacional,sectorial y regional; y rastreará las dimensiones económicas, incluido el lavado de activos y los mecanismos de impunidad.

- **Aplicaremos metodologías de macrocriminalidad, como las usadas frente a crímenes de lesa humanidad o graves violaciones de derechos humanos.**
- **Crearemos una instancia de juzgamiento especial, al más alto nivel posible, para los casos de corrupción sistémica**.
- **Las sentencias incluirán medidas de reparación integral para víctimas individuales y colectivas. La macrocorrupción también deja víctimas y territorios heridos, y deben ser reparados**.

3. Fondo de Reparación de Víctimas de la Corrupción

- **Canalizaremos al Fondo todos los capitales y recursos expropiados a los corruptos** para reparar no solo el dinero público malgastado, sino también los daños materiales e inmateriales causados a víctimas individuales, colectivas y a la sociedad.
- Cuando la corrupción golpee un sector, como la salud, los recursos recuperados se destinarán a fortalecer ese sistema y a reparar a sus víctimas. **Cada peso recuperado debe convertirse en un derecho restituido**.
- **Fortaleceremos la Sociedad de Activos Especiales (SAE) para que la recuperación de bienes ilícitos se traduzca en obras y servicios para la gente**. **Evaluaremos, además, la aplicación de modelos de justicia restaurativa en este campo.**

4. Presencia decidida en los territorios

- Llevaremos la acción coordinada del sistema de justicia a los lugares con mayores índices de corrupción e impunidad, con capacidad real de investigación y juzgamiento en el terreno. **Donde más roban lo público, más presente debe hacerse el Estado.**

Trabajaremos para que surjan alianzas territoriales anticorrupción, que integren a los movimientos sociales, las ciudadanías, el sector privado con la acción del Estado de derecho.

5. Movilización de la sociedad

- **Ningún país derrota la macrocorrupción solo desde los despachos**. **Necesitamos ciudadanía vigilante y organizada**. Junto con movimientos sociales, organizaciones comunitarias, academia y sector privado, **promoveremos un gran movimiento nacional de participación, control y fiscalización social**.
- **Impulsaremos una cultura de integridad que empiece en la escuela y llegue a cada oficina pública, a cada empresa y a cada familia**. La transparencia debe ser una práctica cotidiana, no un discurso.
- **La sociedad debe sostener una estrategia de rechazo moral y ético frente a los corruptos y a todo acto ilícito relacionado con la corrupción**.
- **La participación ciudadana será vínculo y motor: veeduría, seguimiento, denuncia responsable**.
- **Acompañaremos a las víctimas de la corrupción cuya memoria, exigencia de verdad y reivindicación de justicia son definitivas para triunfar en esta causa**.

***

Compañeras y compañeros:

En Pasto, al lanzar mi precandidatura, acompañado por los movimientos sociales, dije que, como sociedad marcada por una historia de violencia, desigualdad, patriarcado y racismo, padecemos una profunda degradación moral, y que por eso **requerimos una revolución ética**. **De esa revolución hace parte una rebelión ciudadana contra la corrupción y por la trasparencia**.

Lo mejor de la historia de Colombia ha sido hecho por mujeres y hombres que, desde la política, la justicia y los movimientos sociales, entregaron su vida **por un país decente**. Se enfrentaron a los corruptos del Estado, a las mafias, al narcotráfico. **Prefirieron el riesgo antes que el silencio**; **la verdad antes que el privilegio**; **la dignidad antes que la impunidad. Su ejemplo sigue alumbrando nuestro camino**. A ellas y a ellos no les debemos sólo un homenaje, sino sobre todo coherencia. **Nos enseñaron que la conciencia no se vende, que el valor vence al miedo y que ningún aparato criminal -dentro o fuera del Estado- es más fuerte que un pueblo decidido**. Por eso estamos

aquí: para **convertir la indignación en fuerza cívica, y la esperanza en un proyecto de país sin miedo a la corrupción.**

La decencia no puede ser consigna es un requisito y una condición ineludible en el ejercicio de gobierno que emprenderemos en esta segunda fase del cambio social.

Seguiremos adelante, con la frente en alto, hasta que la macrocorrupción sea cosa del pasado. Que nadie nos arrebate la ilusión de una Colombia limpia, justa y digna.

Cali, Valle del Cauca, 06 de septiembre de 2025.

